

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL LICENCIADA A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE DIFUNDEN NOTICIAS, ASÍ COMO LA METODOLOGÍA QUE DEBERÁ UTILIZARSE PARA REALIZAR EL MONITOREO DE LAS TRANSMISIONES SOBRE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS FEDERALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015 EN LOS PROGRAMAS EN RADIO Y TELEVISIÓN QUE DIFUNDAN NOTICIAS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/CG223/2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante Instituto o INE), presento **VOTO PARTICULAR** respecto del punto 8 del orden de día, de la Sesión Extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el pasado 22 de octubre de 2014, señalando que el sentido de mi voto es **EN CONTRA** de la decisión adoptada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales de este órgano electoral, respecto de la exclusión, en el Acuerdo INE/CG223/2014 y la Metodología y Catálogos aprobados a través de éste, de: *i)* los programas de “opinión, análisis y debate”, y *ii)* la variable “Información y Opinión” a los programas de revista o espectáculos, así como a toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, en el monitoreo de las transmisiones de los programas de radio y televisión sobre las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2014-2015 en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

ANTECEDENTES

1. El diecisiete de julio de dos mil catorce, el Comité de Radio y Televisión del Instituto aprobó el Acuerdo INE/ACRT/05/2014, por el que se aprueba la consulta a las organizaciones que agrupan concesionarios de radio y televisión y a los profesionales de la comunicación con motivo de los lineamientos generales que se recomiendan a los noticieros respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes en el proceso electoral 2014-2015, de conformidad con el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. Con el propósito de cumplir con lo dispuesto por los artículos 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, numeral 1, inciso h y 66 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el Comité de Radio y Televisión de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/ACRT/06/2014 el catorce de agosto pasado el Proyecto de Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. El veinte de agosto del año en curso, el Consejo General del Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG133/2014, por el que se aprueban los Lineamientos Generales que, sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. El tres de septiembre del año en curso, el Consejo General del Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG151/2014 por el que se ordena la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015 en los programas que difundan noticias, de conformidad con el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. Mediante el Acuerdo INE/CG151/2014 del tres de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General instruyó al Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral para la elaboración del catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, y la metodología para el monitoreo de espacios noticiosos, con motivo del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

6. El catorce de octubre de dos mil catorce, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo [...] por el que se aprueba la propuesta del catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como de la metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo de las

transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 2014-2015, identificado con la clave INE/ACRT/10/2014.

7. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG/223/2014, por el que se aprueba el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, así como la metodología que deberá utilizarse para realizar el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del proceso electoral federal 2014-2015 en los programas en radio y televisión que difundan noticias, así como la Metodología y el Catálogo correspondientes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Como se ha señalado, el sentido mi voto es **EN CONTRA** de la decisión adoptada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales de este órgano electoral, respecto de la exclusión, en el Acuerdo INE/CG223/2014, y de la Metodología y el Catálogo aprobados a través de éste, de: *i)* los programas de “opinión, análisis y debate”, y *ii)* la variable “Información y Opinión” a los programas de revista o espectáculos, así como a toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, en el monitoreo de las transmisiones en los programas de radio y televisión sobre las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2014-2015, en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

Lo anterior, toda vez que es mi convicción que, atendiendo el marco constitucional que regula tanto la prestación del servicio público de radiodifusión como el

derecho a la información y a la libre manifestación de ideas, el Acuerdo, la Metodología y el Catálogo aprobados debieron incluir:

i) los programas de “opinión, análisis y debate”, tomando en consideración que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandata a este Organismo en su artículo 185, párrafo 5, a la realización de “monitoreos de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias”, y contrario a lo sostenido por la mayoría de las y los Consejeros Electorales en el marco de la sesión del Consejo General en la que se analizó este Acuerdo, tales programas sí difunden noticias, y

ii) el análisis de la variable “Información y Opinión” —es decir, la valoración de los adjetivos, positivos, negativos o neutros utilizados— en los programas de revista o espectáculos, así como en toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, a fin de brindar información completa respecto de las menciones sobre las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2014-2015, en los programas de radio y televisión que son objeto del monitoreo.

Así, al excluir a los programas que difunden noticias correspondientes al género o formato de “opinión, análisis y debate”, y al omitir la valoración de la información que se difunde en los programas de revista o espectáculos, así como a toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, esta autoridad electoral no cumplió a cabalidad con su obligación legal, y estableció una restricción indebida e injustificada al ejercicio pleno del derecho a la información de las y los ciudadanos, al aprobar una metodología y catálogo que proporcionarán información incompleta respecto de

las coberturas que los medios de comunicación llevarán a cabo sobre el proceso electoral federal que está en curso.

En este contexto, contrario a lo afirmado en el Acuerdo aprobado, el derecho a la información de las y los ciudadanos y la libertad de expresión de los comunicadores u opinadores son derechos humanos interdependientes —se integran y complementan—, que no se oponen ni se excluyen, por lo que la autoridad no debió sustituir o sobreponer uno sobre el otro, sino garantizarlos conjunta y armónicamente, a partir de una metodología que, en el marco de los derechos contenidos en la Constitución, y de las obligaciones correspondientes a la prestación del servicio público de radiodifusión, incorporara los programas y variables referidos.

Partiendo de esta perspectiva y de las responsabilidades conferidas constitucionalmente a este Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 1º constitucional, las determinaciones de su máximo órgano de dirección deben tener como sustento una interpretación de las normas relativas a derechos humanos que favorezca en todo momento la protección más amplia.

El Acuerdo INE/CG223/2014, y de la Metodología y el Catálogo aprobados a través de éste —en cumplimiento a lo previsto en el artículo 185 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales—, tienen como objeto hacer públicos los resultados del monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal en los programas que difunden noticias —a través de los tiempos destinados a la comunicación social de este Instituto y en los medios informativos que determine el Consejo General—, a fin de garantizar el derecho a la información de las y los ciudadanos, intrínsecamente relacionado con el ejercicio del derecho al voto libre.

De ahí, que la omisión de incluir en dicho Catálogo los programas de “opinión, análisis y debate” y el análisis de la variable “Información y Opinión” en los programas de revista o espectáculos, así como en toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, es contraria a la obligación de esta autoridad de buscar la protección más amplia del derecho a la información.

En el mismo orden de ideas, es importante señalar que la emisión de los Lineamientos generales que se recomendaron a los noticieros para la cobertura que realizarán de las precampañas y campañas en el marco del Proceso Electoral Federal, cobra relevancia a la luz de que la radio y televisión son servicios públicos de interés general, están vinculados directa y estrechamente con el derecho a la información.

Al definir el Catálogo de las emisoras a monitorear, se debía tomar en consideración que: *i)* la difusión de sus resultados es el único mecanismo previsto por nuestra normatividad para dar a conocer a las y los ciudadanos los aspectos cuantitativos y cualitativos de la cobertura dada por los medios de comunicación a las precampañas y campañas electorales y; *ii)* si bien la norma no lo prevé como tal, el monitoreo y sus resultados, permiten de algún modo, contar con información para advertir si la cobertura dada por los medios de comunicación tomó en consideración las recomendaciones emitidas por este Instituto, a través de los Lineamientos generales.

SEGUNDO. Con el propósito de contextualizar la materia de este voto particular, es importante señalar que, si bien el monitoreo de las transmisiones de programas durante precampañas y campañas del proceso electoral 2014-2015 representa el

octavo ejercicio de este tipo a nivel federal, el del proceso electoral que apenas inicia, se llevará a cabo en entorno muy distinto al de anteriores procesos, debido no sólo a las modificaciones que la prestación de los servicios de radio y televisión han sufrido de 1994 a la fecha, sino al marco constitucional vigente a partir de las reformas aprobadas en los últimos años. Por ello, el observatorio aprobado respecto del proceso electoral 2014-2015, estaba llamado a incorporar diversos elementos novedosos respecto del ejercicio del 2006 ó 2012, a partir de un análisis progresivo, conjunto, integral, universal e interdependiente, de los derechos contenidos en nuestra Constitución Política y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano, mismas que han modificado sensiblemente el marco de la actuación y exigencia a los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Así, si bien como algunos señalaron en el marco de la discusión sustentada tanto en el Consejo General como en el Comité de Radio y Televisión, el mandato legal referente al monitoreo de programas que difunden noticias no sufrió cambios en la reforma político-electoral de 2014, el Acuerdo que se sometió a consideración del Consejo General no debió ser ajeno a la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que modifica la naturaleza de las obligaciones correspondientes a la prestación de estos servicios públicos, y amplía los derechos asociados a la misma y su garantía.

En este sentido, a fin de ilustrar las afirmaciones anteriores, resulta indispensable retomar los mandatos incorporados —a partir del 11 de junio de 2013— al texto constitucional; principalmente, aquéllos contenidos en su artículo 6º, el cual señala lo siguiente:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como **a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones**, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

[...]

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

[...]

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La **radiodifusión es un servicio público de interés general**, por lo que **el Estado garantizará** que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, **preservando la pluralidad y la veracidad de la información**, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. **Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa**; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

[...]” (Resaltado fuera del original)

De este modo, según se desprende del texto transcrito, en lo que hace al derecho a la información y a la libre manifestación de ideas, *“toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”*; asimismo, para efectos de garantizar el ejercicio de estos derechos, se prescribe que la radio y la televisión —que anteriormente tenían la naturaleza de servicios de interés público— son ahora servicios públicos de interés general, que obligan a sus prestadores no sólo a privilegiar los intereses colectivos sobre los comerciales, sino que se vinculan directa y estrechamente al derecho a la información, mismo que en materia político electoral debe señalarse, atañe tanto al emisor, como al receptor de la misma y con la obligación adicional de garantizar pluralidad y veracidad de la información.

Dicha modificación, en tanto se incorpora a los derechos constitucionales exigibles por las y los mexicanos, no debe constituir únicamente una aspiración abstracta, sino que implica —destacadamente en la materia que nos ocupa— un giro significativo respecto de las obligaciones exigibles a los concesionarios respecto de las y los ciudadanos, es decir, respecto de sus audiencias.

De igual manera, la incorporación en el texto constitucional de la prohibición para que los medios de comunicación difundan publicidad o propaganda presentada como noticia o información periodística, representa no sólo un reconocimiento a prácticas indebidas, documentadas a partir del nuevo modelo de comunicación político electoral, sino una medida para garantizar que las y los ciudadanos televidentes y radioescuchas cuenten con elementos que les permitan identificar cuándo se está ante información propagandística o publicitaria, es decir, ante un espacio comercial y cuándo ante un espacio noticioso.

Desde esta perspectiva, una interpretación integral y sistemática de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, obligaba al Consejo General a incluir en el Catálogo tanto los programas de “opinión, análisis y debate” como el análisis de la variable “Información y Opinión” en todos los géneros periodísticos y programas incluidos en el Catálogo, en atención a que las obligaciones conferidas constitucionalmente a los concesionarios de radio y televisión guardan relación con el derecho a la información de las y los ciudadanos, en el caso particular, en materia político-electoral.

TERCERO. Ahora bien, como se ha señalado en los antecedentes del presente voto particular, atendiendo a lo ordenado por el artículo 160 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por primera ocasión este monitoreo de programas que difunden noticias fue precedido de una Consulta realizada por el

Instituto a 7 organizaciones de concesionarios y a 23 de profesionales de la comunicación, respecto de los Lineamientos de recomendaciones a noticieros y sobre la metodología que se debía utilizar para la realización del monitoreo de coberturas electorales. Así, reconociendo la relación existente entre ambos ejercicios, la mencionada consulta no se limitó única y exclusivamente al contenido de los Lineamientos, también se refirió al monitoreo de las coberturas electorales de los programas de radio y televisión que difunden noticias.

De los resultados de la referida consulta deben destacarse las respuestas recibidas por parte de 9 profesionales de la comunicación que la atendieron, quienes respecto de la metodología que se debía utilizar para el monitoreo del actual proceso electoral, consideraron que, como una medida para garantizar el derecho a la información y por su amplia influencia en la opinión pública, el Instituto debía incorporar al monitoreo del actual proceso electoral, los programas de opinión.

En este orden de ideas, los resultados arrojados por la consulta realizada por esta autoridad electoral, evidentemente demandaban que el análisis del monitoreo de programas que difundan noticias, se vinculara estrechamente a la garantía al derecho a la información, que como se ha señalado, no sólo es el de las y los ciudadanos para emitir un voto libre y razonado, sino también de los medios que dan información y de sus comunicadores en un marco de libertad de expresión y libre manifestación de ideas.

Sin embargo, contrario a la opinión vertida por los profesionales en la materia, en la Metodología y el Catálogo aprobado por el Consejo General, se excluyeron a todos los programas que difunden noticias mediante el género o formato de

“opinión, análisis y debate”, señalando que ello se hacía “en consideración y respeto a los principios de la libertad de expresión”.

Al respecto, debo señalar que bajo ninguna circunstancia coincido en que dar información a los ciudadanos sobre dichas tendencias representa una afrenta a la libertad de expresión, al contrario, estoy convencida que abona en su refuerzo, porque incorpora la libertad de saber por parte de las y los ciudadanos.

En este contexto y tal como lo señalé en el marco de la sesión del Consejo General en la que se discutió el Acuerdo materia de este voto particular, admitir tal afirmación implicaría señalar que en los programas de noticias que sí son objeto del monitoreo, este Instituto vulnera el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores que participan en los mismos. Y si ésta es la lectura que damos al ejercicio de monitoreo, si asumimos que monitorear programas de opinión o espectáculo implica una restricción a la libertad de expresión, entonces estoy convencida que tendríamos que desconocer el mandato previsto en el párrafo 5 del artículo 185 de la Ley General, pues implicaría una restricción injustificada e inconstitucional a los derechos humanos, misma que esta autoridad bajo ninguna circunstancia debe aceptar.

Sin embargo, es mi convicción que monitorear no es restringir, bajo ninguna circunstancia; al contrario, el monitoreo de coberturas electorales representa un ejercicio de transparencia y observación sobre la actuación de los medios de comunicación, que potencializa los derechos y su ejercicio, por lo que se convierte en una herramienta más del Estado Mexicano para garantizarlos.

Es por ello que sostengo que, con la determinación adoptada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales, esta autoridad no cumple a plenitud con la obligación constitucional de garantizar el ejercicio universal e interdependiente de los

derechos humanos, ya que limita la posibilidad de que las y los ciudadanos conozcan no sólo el tiempo destinado a cada partido político, precandidato o candidato de partido o independiente, por parte de los medios de comunicación en la totalidad de los géneros o formatos de los programas que difunden noticias, sino que omite precisar cuánto de ese tiempo tuvo adjetivos favorables o desfavorables para los actores en contienda y cuándo no los tuvo.

Estoy convencida que incluir programas que difunden noticias mediante el género o formato de “opinión, análisis y debate”, habría representado un ejercicio más robusto de monitoreo o de observación de medios, pues como se ha señalado, este ejercicio no afecta en lo absoluto la libertad de cada medio para destinar más o menos tiempo a uno u otro partido político o contendiente, tampoco limita el ejercicio de opinión sobre cada uno de estos. Por supuesto que un opinador emite opiniones subjetivas; nadie está buscando que no sean subjetivas; nadie está buscando que se dirijan en una dirección o en otra. Por el contrario, el propósito del monitoreo realizado por esta autoridad es que las y los ciudadanos cuenten con elementos necesarios para conocer respecto de la manera en que los medios de comunicación dan cobertura y seguimiento informativo a los procesos electorales. Únicamente se trata de una fotografía del comportamiento que en libertad tienen los medios de comunicación, eligiendo qué destacan, a qué le dan más tiempo, con el propósito de que la ciudadanía use esta información para el ejercicio libre de emitir un voto razonado e informado.

La difusión de los resultados de esta clase de ejercicios, favorece la garantía del derecho a la información e inhibe prácticas de parcialidad, y en todo caso, las coberturas se documentan para que las y los ciudadanos conozcan la forma en que los actores fueron tratados en cada uno de los programas de noticias que se difunden. Lo anterior, con el propósito de que los electores cuenten con elementos

adicionales que favorezcan el ejercicio de otros derechos como lo es el derecho al voto, el día de la jornada electoral.

Me resulta inaceptable la implementación de un ejercicio de monitoreo que excluye de las variables e instrumentos de medición a los opinadores y analistas, que parte de una concepción en la que éstos —que por el ejercicio propio de su profesión cuentan con medios privilegiados para observar, valorar y analizar el actuar de quienes contendientes en un proceso electoral, y comunicar sus posturas y opiniones en el espacio público—no pueden ser observados. No puedo acompañar una visión que coloca, sin mayor análisis y debate, a quienes influyen de forma preponderante en la construcción de la opinión pública, en una condición de privilegio que los excluye del escrutinio que el ejercicio mismo de su profesión impone a quienes ellos observan.

CUARTO. Como un segundo elemento de disenso con la Metodología incluida en el Acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo General, debe señalarse que la misma no sólo excluye de toda valoración a los programas de género o formato de “opinión, análisis y debate”, sino que también omite la utilización de la variable “Información y Opinión” respecto de toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo.

Es decir, en la Metodología que fue aprobada se establece que, si bien algunos de los programas incluidos en el Catálogo incluyen piezas de opinión, análisis y debate, mismas que serán contabilizadas en cuanto a los tiempos que se dedican a su transmisión, no serán valorados en cuanto a su contenido.

En este contexto, es mi convicción que los resultados arrojados por el monitoreo y que serán difundidos a los electores serán incompletos, ya que 3 de los 5 géneros

van a medirse con “valoración” y dos de ellos, que son precisamente los más proclives a tener adjetivos (opinión, análisis y debate), a pesar de que se contabilizarán para la variable “Tiempos de Transmisión”, no serán medidos en cuanto al número de adjetivos calificativos positivos o negativos.

Lo anterior implica tener resultados de tiempo de transmisión que no van a reflejar adecuadamente si ese tiempo presenta una tendencia negativa o positiva en cuanto a los adjetivos utilizados para un partido, actor político determinado que participa en las precampañas o campañas, o un tema sometido a consulta popular, ya que incluirá una medición cuantitativa de los géneros de: i) opinión y análisis, ii) debate, iii) notas, iv) reportajes y v) entrevistas, pero sólo contabilizando los adjetivos de las notas, reportajes y entrevistas, excluyendo los que se den en las opiniones y análisis o en los debates.

El criterio aprobado para eximir la medición de valoraciones en las piezas de los géneros periodísticos mencionados, no demuestra en lo absoluto que sea imposible aplicar la metodología al género de opinión, ya que el género sí está considerado en la metodología, sin embargo, como se ha indicado, queda claro que la omisión corresponde a una decisión inexplicable desde la perspectiva de los derechos, que considera una afectación a la “libertad de expresión” de las y los comunicadores el medir e informar las menciones positivas o negativas en un determinado segmento de opinión, análisis o debate.

Resulta de la mayor relevancia insistir en que la medición de las opiniones negativas o positivas respecto de los partidos políticos, precandidatos, candidatos independientes y de partidos, no vulnera los derechos de los medios de comunicación ni de los comunicadores, y es precisamente el objetivo de este monitoreo dar a conocer a las y los ciudadanos el modo en que determinado

programa decide dar cobertura de las precampañas y campañas, misma que es un reflejo de la pluralidad.

QUINTO. Finalmente, se debe señalar que estoy de acuerdo con la incorporación de programas de Revista o Espectáculos en el Catálogo que se utilizará en el monitoreo de programas que difunden noticias para el proceso electoral 2014-2015; sin duda representa un avance respecto de ejercicios anteriores de observación. Basta recordar que en este tipo de emisiones han existido las menciones o apariciones “espontáneas” de servidores públicos, precandidatos o candidatos, quienes en entrevistas o incluso cocinando se refieren a algún logro de gobierno o a una propuesta de campaña. Incluso, en este formato de programas algunos conductores han utilizado camisetas con frases alusivas a algún partido político.

Sin embargo, considero que el análisis que se incluye en la Metodología para este tipo de programas es trunco. Sería deseable que además de medir la variable “Tiempos de Transmisión”, se valoraran los programas de Revista y Espectáculos a partir de la variable de “Información y Opinión”. Puede ser útil saber cuánto tiempo se dedica a los precandidatos, candidatos y partidos en esta clase de programas; sin embargo, las y los ciudadanos tienen derecho a conocer si en dicho tiempo se utilizan adjetivos o no respecto de determinado actor de la contienda electoral.

Es mi convicción que los programas de Revista y Espectáculos deben ser analizados y monitoreados a partir de todas las variables plasmadas en la Metodología del Acuerdo, con el propósito de que los electores conozcan cuál es el tratamiento que estos espacios dan a los actores de una contienda electoral;

pues insisto una vez más, esta clase de ejercicios que realiza la autoridad electoral en ninguno momento vulneran el principio de la libertad de expresión de los comunicadores respecto de cómo realizan las coberturas de las precampañas y campañas electorales. Dicho principio y derecho no se ve afectado o violentado de alguna forma con el monitoreo que se realiza, pues en términos de lo expuesto, éste sólo tiene el propósito de presentar a la ciudadanía, en cifras, los resultados de su cobertura, sin sesgos ni limitaciones. Así, la exclusión de géneros o de variables de medición no refuerza la libertad de expresión, sino que constituye un ejercicio que va en detrimento a los derechos de las y los ciudadanos de conocer con transparencia, la forma en que los medios de comunicación y los comunicadores presentan las actividades de los partidos políticos, candidatos independientes y de partido en un proceso electoral.

En este mismo orden de ideas, si bien como se ha señalado, comparto la inclusión de estos programas en el Acuerdo aprobado, pues amplían el marco sobre el que se potencializa el derecho a la información de las y los ciudadanos, no deja de llamar la atención que el Catálogo y la Metodología del Acuerdo al que se refiere el presente voto particular, sí incluya en el monitoreo a los programas de revista y espectáculo, y no tome en cuenta a los programas de opinión, análisis y debate, cuando estos últimos formatos que son lo que más tiempo dedican a la cobertura de los temas político electorales.

Lo anterior constituye un reflejo adicional de la insuficiencia de la decisión de la autoridad electoral para la tutela del derecho a la información de las y los ciudadanos, pues a partir de esta decisión, será más fácil para ellos conocer qué se dice sobre las precampañas y campañas en los programas llamados “de farándula” —que si bien en los hechos han servido como marco de difusión de algunos de los contendientes en un proceso electoral, no tienen éste como uno de

sus objetivos principales—, que en los programas con formato de opinión, debate y análisis del acontecer político nacional —cuyo objetivo, en el marco de una contienda electoral, potencializa su difusión.

SEXTO. En congruencia con las consideraciones referidas anteriormente, expongo que difiero de la interpretación que la mayoría de las y los Consejeros del Consejo General expresó, respecto que esta autoridad cumplió en la garantía del derecho a la información de los medios de comunicación y el derecho a la información de las y los ciudadanos, en el contexto de la Metodología y el Catálogo aprobado para realizar el monitoreo de las coberturas electorales de los programas de radio y televisión que difunden noticias.

Estoy convencida que la observación de medios que el Instituto realizará durante las precampañas y campañas electorales constituye un instrumento de gran utilidad y enorme valía para garantizar el derecho a la información de las y los ciudadanos en el contexto de un proceso electoral; que esta clase de ejercicios, además de respetar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas de cada medio de comunicación y de los periodistas o comunicadores, aporta cifras y datos para que las y los ciudadanos conozcan el tiempo que en cada programa se le dedica a un precandidato, candidato o partido, o si existe alguna tendencia favorable o negativa a los mismos. Se trata precisamente de herramienta que potencializa el derecho de las y los ciudadanos a saber, el derecho a conocer.

Como se ha señalado, el marco constitucional en el que se desarrolla este ejercicio obliga al Instituto a vincular el ejercicio del monitoreo las coberturas electorales a la garantía del derecho a la información, no sólo de los ciudadanos para emitir un voto libre y razonado, sino también de los medios de comunicación, en un marco de libertad de expresión y libre manifestación de ideas.

De esta forma, contrario a lo que en algunos espacios y en distintos momentos se ha sostenido, este ejercicio no busca medir el comportamiento de las coberturas porque deban necesariamente dedicar los mismos minutos a cada partido, o porque todas las opiniones deban ser favorables para todos los contendientes o partidos.

Estoy convencida que las prácticas de monitoreo fomentan el equilibrio en la cobertura noticiosa de los medios de comunicación; inhiben prácticas de parcialidad, y además, permiten que las coberturas se documenten para que las y los ciudadanos conozcan la forma en que los actores políticos son tratados por algunos programas de radio y televisión. En este sentido, la realización de este tipo de registros constituye una herramienta que dota a las y los mexicanos de mayores elementos para analizar la información que ve o escucha en distintos espacios de radio y televisión.

Por todo ello, para el actual proceso electoral, además de medir los tiempos que se dedican los actores y partidos de una contienda electoral e incluir en el Catálogo aprobado los programas de revista o espectáculos, estoy convencida que era necesario que el análisis del monitoreo ordenado por Instituto diera otro paso adelante respecto de ejercicios anteriores; que reconociera a cabalidad las reformas que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión han sido incorporadas a nuestra Constitución y que garantizara de mejor forma la totalidad de los derechos asociados a los mismos.

En el mismo sentido, debo señalar que la aplicación de la variable de “Información y Opinión” en todos los géneros periodísticos del monitoreo habría representado un avance sensible en la práctica de registrar el comportamiento de los medios de comunicación durante un proceso electoral.

En virtud de las razones y fundamentos anteriormente expuestos, emito el presente **VOTO PARTICULAR**, a fin de sustentar el voto **EN CONTRA** de la decisión adoptada por la mayoría de las y los Consejeros Electorales de este máximo órgano electoral, en cuanto a lo que se refiere a la exclusión, en el Acuerdo INE/CG223/2014 y la Metodología y el Catálogo aprobados a través de éste, de: *i)* los programas de “opinión, análisis y debate”, y *ii)* la variable “Información y Opinión” a los programas de revista o espectáculos, así como a toda pieza presentada en el género de opinión, análisis y debate en los programas que forman parte del Catálogo, en el monitoreo de las transmisiones en los programas de radio y televisión sobre las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2014-2015, en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL